Doctora:

Atte.: **GUIOMAR PORRAS DEL VECCHIO**

Magistrada Sustanciadora.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

Palacio de Justicia, Calle 40 No, 44-80 Piso 6 Edificio Lara Bonilla Barranquilla-Atlántico. Colombia Telefax: 3410159; Email: [ppinedas@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:ppinedas@cendoj.ramajudicial.gov.co)

***Primera instancia:*** Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla.

***Referencia:*** Demanda de Proceso Verbal de Nulidad de Contrato.

***Demandante:*** GERMAN ANDRES MONRROY SANCHEZ

***Demandado:*** MARITZA PEREZ MEJIA.

***No de Radicado:*** 08-001-31-53-010-**2018-00284**-01.

***Asunto:*** **RECURSO DE SÚPLICA.**

El suscrito apoderado judicial, acudo a usted con todo respeto a fin de interponer el presente **RECURSO DE SÚPLICA** conforme al artículo 331 del C. G. del P., con las siguientes consideraciones:

1. **SINOPSIS DEL CASO:**

Tenemos que el presente proceso de nulidad, surge por un contrato inexistente por ausencia de uno de los requisitos del artículo 1611 del C. C., no obstante, se efectuaron cumplimientos parciales del contrato ineficaz por las partes, ante esto, estas efectuaron algunas devoluciones como fueron, del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 040-249132 apartamento # 302 del Edificio Don Álvaro ubicado en la Carrera 59B # 91-13 y del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas **UEK-808**, **a sus propietarios**. El honorable Juez de conocimiento resolvió decretando la nulidad del contrato del 6 de agosto de 2018, con su adición de fecha 14 de septiembre de 2018, profiriendo la Sentencia adiada el 1º de octubre de 2019 y ordenando pagar el precio del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas **UEK-808**, lo que itero, ya fue devuelta a su propietario[[1]](#footnote-1), es así como, el suscrito solicita una prueba sobreviniente debido a que el proceso es de nulidad del contrato y era imposible para la parte demandante conocer de las situaciones que posteriormente podían alegarse por la contraparte, atendiendo que, al inicio, la causa del proceso era de ***puro derecho***, y además, por lo que nunca esperé que el juez tomara dicha decisión, puesto que no existe prueba de que la empresa A. CONCRETAR PROYECTOS S.A.S., tenga el derecho real de dominio o posesión del pluricitado vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas **UEK-808**, y que en efecto, en la realidad de los hechos materiales no lo tiene, y mucho menos posee, no obstante, el objeto de la solicitud probatoria es demostrar la anterior aseveración, ya que desconozco el medio de prueba que convenció al Juez, para resolver conforme lo dispuso, y el amparo para tal solicitud probatoria es que la señora MARITZA PÉREZ no tiene ningún derecho de recibir pago por el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas **UEK-808**, pero que el honorable Juez no tiene certeza de lo ocurrido con éste vehículo, ni motivó para convencer, el por qué la señora MARITZA PEREZ tiene el supuesto derecho a recibir el precio de dicho vehículo, que también dicho sea de paso, incurrió en un defecto factico, al *‘declarar probado un hecho que no emerge con claridad y suficiencia de los medios de prueba que reposan en el expediente’* citando a la Corte Constitucional en su Sentencia T-074 de 2018.

**Atendiendo a la aparente confusión del bien mueble objeto de controversia, es preciso hacer la siguiente claridad, ya que en este negocio se ha expresado, sobre tres (3) diferentes vehículos a saber:**

1. La Camioneta Santa Fe GLS, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas OQR-6**6**9.
2. La Camioneta Santa Fe GLS Marca Hyundai Modelo 2016, de placas OQR-6**9**9, color Blanco Cerámica.
3. El Vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808. (*por éste fue que se ordenó pagar el precio*).

**Luego entonces, se concluye en este acápite, que, el objeto de la apelación fue por el reconocimiento del precio del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas** **UEK-808**, **dicho éste, que la empresa A. CONCRETAR PROYECTO S.A.S., NO ha tenido en su patrimonio, ni tampoco tuvo la posesión de ella, el representante legal (*GERMAN MONRROY en ese entonces*), ya que éste tuvo la tenencia por corto tiempo, -***27 días***- cuando fue solicitada su devolución por parte de su real propietario[[2]](#footnote-2) –*Jorge Ramírez*- y el poseedor –*Walter Ramírez*-, como está demostrado dentro del expediente, es por esto, que es pertinente la solicitud probatoria al cumplir la causal de un hecho nuevo, como lo contempla el artículo 327-3 del C. G. del P.**

**Adicionalmente, nótese que en los alegatos de conclusión MARITZA PEREZ, no alegó el pago del precio del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, sino de la Camioneta Santa Fe GLS, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas OQR-669, como fundamento para que el Juez, procediera a darle aplicación al inciso 4º del articulo 281 *ídem*, que al tenor expresa:**

*‘En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,* ***siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión*** *o que la ley permita considerarlo de oficio.’* (Énfasis añadido).

1. **PROCEDENCIA DEL RECURSO:**

la súplica procede contra los autos que por su naturaleza serian apelables, no obstante, el auto que negó el decreto de prueba, es apelable conforme el numeral 3º del articulo 321 *ut-Supra*.

1. **RAZONES DE INCONFORMIDAD:**
2. El Magistrado Ponente, con todo respeto, niega el decreto de la prueba con el sustento que al tenor se expresa:

*‘Pero revisado el informativo* ***se advierte, que la restitución de lo que se alegó pagado por la parte demandada, fue un tópico que tuvo protagonismo [sic] en el debate probatorio, como que fue mencionado, no solo en la contestación de la demanda, sino en la demanda de reconvención*** *que le fue admitida a la demandada principal, y que dicho sea de paso, no fue contestada por el otro extremo procesal.’ (énfasis añadido).*

**Pero nótese que, *i)* no advierte la ponente con todo respeto, que es lo que se alegó pagado, omitiendo que fue el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808. *ii)* no hay la especificación requerida como motivación para negar el decreto de prueba, *iii)* recuérdese que estamos debatiendo sobre el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas** **UEK-808**, **y a ello debemos remitirnos y concentrarnos, ya que fue el objeto de apelación conforme al artículo 328 *ídem*, *iv)* no es suficiente que el Vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, fuese mencionado en el debate probatorio, sino que debe existir certeza de qué ocurrió con dicho vehículo.**

**Ahora bien, aunque la camioneta se mencionó en apartes de las audiencias, el Juez no tiene certeza de la situación jurídica y material del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas** **UEK-808, salvo la prueba documental incorporada por el testigo GERMAN MONRROY, donde se demuestra la devolución que se hizo a su propietario (***Jorge Ramírez***) o poseedor de nombre WALTER RAMIREZ y el desconocimiento de dicho vehículo, por parte de la interrogada MARITZA PEREZ y el testigo DIXON CALDERON.**

**El hecho nuevo que contempla la norma para el decreto de la prueba solicitada, surge es precisamente de la decisión del Juez en la Sentencia y ésta tuvo ocurrencia después de la oportunidad probatoria, a pesar que, de acuerdo al *A-Quem*, el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, tuvo protagonismo[[3]](#footnote-3) [*sic*] en el debate probatorio, para la parte demandante se había vencido su oportunidad de solicitar pruebas con la presentación de la demanda, y en la reconvención como se puede observar, no se alegó nada sobre el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, ni siquiera MARITZA PEREZ, ni su mandatario DIXON CALDERON, tenían idea de dicho vehículo.**

**En mi criterio, es incorrecta la negativa del decreto probatorio solicitado, debido a que, el mismo artículo 327 del C. G. del P., no es óbice, cuando existan deficiencias en los supuestos facticos que se deberán valorar para la resolución correcta del caso, pues la misma disposición prevé la facultad de decretar pruebas de oficio de forma preferente, es decir, ante una vaguedad u oscuridad probatoria, es deber del operador jurídico decretar pruebas de oficio, es tanto así, como el alto tribunal constitucional expresó en la resiente Sentencia T-074 de 2018, lo siguiente:**

*‘El segundo hecho, correlacionado con el anterior, se origina por la decisión de la Sala Civil-Familia del Tribunal demandado de negar por improcedente la práctica de la prueba ante la Junta de Médicos Forenses, por no estar inmersa dentro de las causales previstas en el artículo 327 del Código General del Proceso.* ***Sin embargo, las hipótesis fácticas fijadas en la citada norma procedimental se orientan a establecer los casos en que resulta imperativo para el juez decretar la práctica de pruebas, sin que lo anterior signifique, de ninguna manera, que son los únicos supuestos de hecho admisibles para que se efectúe una nueva valoración probatoria en segunda instancia.******De hecho, la norma es bastante clara en que la aplicación se hace “sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas”.*** *Luego, en este caso, resulta insuficiente declarar su improcedencia bajo este criterio, cuando lo cierto es que la propia regla deja abierta la posibilidad para practicar pruebas de oficio ante circunstancias, como la aquí expuesta, donde la información puede ser relevante para superar las deficiencias probatorias presentadas.’* (Énfasis añadido).

1. Siguiendo el curso, por ser pertinente y necesario para clarificar, con respecto a la restitución del precio del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, lo que alegó la parte demandada en su contestación fue:
2. Que entregó en pago **la Camioneta Santa Fe GLS, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas OQR-669** (*este bien nunca se entregó, ni se conoce de su existencia*), según la confesión judicial del apoderado, en su escrito de contesta de demanda, como se observa en la página No 2.

**Nótese acá que, ni siquiera se expresa sobre la Camioneta Santa Fe GLS, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas OQR-699 color Blanco Cerámica y mucho menos, sobre el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808**.

1. Y, que pagó con un inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 040-249132 apartamento # 302 del Edificio Don Álvaro ubicado en la Carrera 59B # 91-13 (*este fue devuelto como se aprecia en el expediente y la restante valoración probatoria*).

**Ahora bien, en este estadio procesal, no se vislumbró ningún protagonismo [sic] sobre el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808.**

1. En la demanda de reconvención lo que se alegó fue el pago de la Camioneta Santa Fe GLS, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas OQR-669, ésta que aparece descrita en la promesa viciada de inexistente, tal vehículo que en el desarrollo de las audiencias y las practicas probatorias no se mencionó, salvo en el interrogatorio de parte de la señora MARITZA PÉREZ en la que el suscrito le preguntó del minuto 38:58 al minuto 41:34 de la audiencia inicial, por la diferencia que existía entre la placa de la camioneta que alegaba MARITZA PEREZ con la camioneta que se describió en la denuncia penal instaurada ante la Fiscalía, ya que una era OQR 6**6**9 y la otra OQR 6**9**9 (esta última que aparece en la promesa ineficaz) y reitero **este fue el vehículo del que tuvo protagonismo desde la presentación de la demanda, por aparecer en la promesa ineficaz**, **la contestación de la demanda y la demanda de reconvención.**
2. En la audiencia inicial, en el interrogatorio de las partes, si se analiza lo que declaró la señora MARITZA PÉREZ (*demandada en proceso de nulidad del contrato*), **no se mencionó por ninguna parte el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808**, todo lo contrario, se declaró sobre la entrega de una Camioneta Santa Fe, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas OQR-669, esto lo corrobora en el interrogatorio del minuto 18:01 al minuto 18:26 de la audiencia inicial, donde manifestó que el vehículo[[4]](#footnote-4) que habían entregado estaba a nombre de la señora DANA MARIEL CALDERON. (*esto último es falso, puesto que el vehículo que estaba a nombre de DANA CALDERON, era la Camioneta Santa Fe GLS, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas OQR-699 color Blanco Cerámica*)

Por lo que es necesario demostrarse que dicho vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, por el que ordenó pagar el Juez, nunca ha sido de la señora DANA CALDERON, ni de MARITZA PEREZ, ni de DIXON CALDERON, sino del señor JORGE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ y su poseedor WALTER RAMIREZ y aun mas, aquel lo vendió a un tercero, como se comprueba del historial del vehículo.

Por otra parte, del expediente se extrae que la susodicha Camioneta Santa Fe GLS, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas OQR-699, le fue traditada a otra persona diferente de mi defendida el día 27 de septiembre de 2018 al señor ANDRES FELIPE GNECCO LOPEZ, y éste la traditó a la empresa M&V TRANSPORTE, LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT: 901.238.145-0, representada legalmente por la señora VANESSA JUDITH VARGAS OROZCO, identificada con C.C. No 55.303.162**, aspectos que se vienen a conocer después de las oportunidades probatorias,** no obstante, en el proceso si militan los documentos que soportan tales alegaciones, como son los documentos aportados en los testimonios de DIXON CALDERON y GERMAN MONRROY, consistentes en las certificaciones extendidas por el Registro Único Nacional de Transito -RUNT-, de lo anterior, se hace claridad debido a la posible confusión de la que fue sujeto el *A-Quo*, y dicho sea de paso, demostrar que la interrogada MARITZA PEREZ y el testigo DIXON CALDERON, faltaron a la verdad en sus declaraciones e interrogatorios, pues afirmaron haber entregado éste vehículo, cuando ellos saben que es absolutamente falso, por tal razón, es necesario escuchar en declaración a la señora VANESSA JUDITH VARGAS OROZCO, para lo cual se aporta a este escrito, el certificado de representación legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla y el actual Registro Único Nacional de Transito -RUNT-.

Adicionalmente, del minuto 18:32 al minuto 18:49 de la audiencia inicial la señora MARITZA PEREZ, confesó que no sabía a quién se le había traspasado la Camioneta Santa Fe, Marca Hyundai Modelo 2016, de placas OQR-669. (*aclaro que este vehículo fue el que se ofreció como pago, en la promesa ineficaz, pero no el que dijo falsamente DIXON CALDERON que entregó a la empresa A. CONCRETAR PROYECTOS S.A.S.*).

Pero del minuto 19:54 al minuto 20:17 de la audiencia inicial, confiesa que la camioneta era una Hyundai modelo 2016 de placas **OQR-669[[5]](#footnote-5)**, reitero **diferente al vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808**, y diferente a la Camioneta Santa Fe GLS, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas **OQR-699,** que por tal, se debe demostrar que son tres (3) vehículos totalmente distintos con la solicitud probatoria como situación nueva.

1. En el interrogatorio efectuado a la señora PAOLA ARROYO, (*demandante del proceso de nulidad del contrato*), solo se mencionó **el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas** **UEK-808**, que ofreció un tercero (*Efraín Ayala*) a la hora y siete minutos, treinta y ocho segundos, (1:07:38) del desarrollo de la audiencia inicial, que manifiesta que, le dijo el tercero que cogieran **el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas** **UEK-808**, y explicó que esa camioneta posteriormente fue solicitada su devolución por su propietario, **luego entonces es una situación nueva, cuando ya se había superado la oportunidad de solicitud probatoria**, **que a pesar de que tuvo protagonismo [*sic*], no por ello se sigue que se conozca su real situación jurídica, aunque si se conoce su situación material con la declaración extra proceso aportada del señor WATER RAMIREZ y que dicha declaración no se solicitó su ratificación artículos 222 y 262 del C. G. del P., es decir, fueron aceptados tácitamente por la contraparte.**

1. No obstante, **el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808,** también fue mencionada por el testigo de nombre GERMAN MONRROY (*quien fue en su momento representante legal[[6]](#footnote-6) de A. CONCRETAR PROYECTOS S.A.S*.), este sí, con conocimiento de causa que del minuto 7:55 al minuto 47:00 de la audiencia de instrucción y juzgamiento, aclaró en su testimonio que se le había entregado **el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808,** sin el debido traspaso o contrato de compraventa de bien mueble o al menos contrato de venta de posesión a favor de A. CONCRETAR PROYECTOS S.A.S., y que posteriormente dicho vehículo fue solicitado por su propietario el día 11 de octubre de 2018, es decir, a los 27 días de cuando se lo entregaron, que muy a pesar de que se menciona el vehículo Fortuner, dicho aspecto no clarifica su situación jurídica, pero si material.

**Es así como se aportó al proceso como medio de prueba documental en la audiencia de pruebas, el escrito firmado por el real poseedor WALTER RAMIREZ y hermano del propietario JORGE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, explicando las razones del porque solicitó su devolución.**

1. **En este orden de ideas, el Juez, con todo respeto en la Sentencia de forma sorpresiva resuelve sobre la devolución de un bien, que solo se tuvo por el representante legal de la empresa A. CONCRETAR PROYECTOS S.A.S., durante 27 días** (*del 14-09-2018 hasta el 11-10-2018*) y que fue devuelto a su propietario por no tener ningún título que le permitiera mantener su posesión, todo lo contrario, el señor GERMAN actuó conforme al ordenamiento jurídico colombiano, que era devolver dicho vehículo a quien lo reclamaba como legítimo propietario o poseedor, pues de lo contrario, podría estar incurso en el tipo penal de *hurto,* *articulo 239*, o de *abuso de confianza, articulo 249* de la ley 599 de 2000, con todas las implicaciones procesales que conlleva tal situación y adicionalmente cabe destacar que pretender y coadyuvar tal conducta, es constitutiva del dispositivo amplificador del tipo penal de coautoría, o, en su defecto participación (determinador o cómplice).
2. Ahora bien, emana diáfano el tipo de proceso que se está debatiendo, que no es otro que el verbal de nulidad del contrato por ineficacia, y no, un proceso de indemnización de perjuicios, ni de restitución de bien mueble, ni de devolución de precio, salvo en la reconvención en la que solicitó la devolución del precio de un vehículo diferente, **que nunca se entregó**, ni se demostró que lo hubiesen entregado, es decir, la camioneta Hyundai modelo 2016 de placas OQR-669.
3. Ante tal decisión sorpresiva, emerge impajaritable la solicitud de medios de pruebas para corroborar que mi defendido no tiene la posesión del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, **puesto que injustamente lo estarían obligando a pagar un vehículo que no tiene, ni posee** **y en tal sentido, dicha decisión no puede ser fuente de una obligación legal en Colombia,** por lo tanto, el objeto de dicha solicitud de decreto de prueba es para demostrar que no es admisible que la empresa A. CONCRETAR PROYECTOS S.A.S., tenga que pagar dicha camioneta.
4. Por lo tanto, esta es una situación nueva para mi protegida y para el suscrito, entendido que, *primero:* El proceso era de ***puro derecho*** para resolver si se anulaba un contrato ineficaz o no, *segundo:* En la contestación de la demanda y la de reconvención tampoco se solicitó por parte de la señora MARITZA PÉREZ el pago del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, es decir, con todo respeto, el Juez no consideró el artículo 281 del Código General del Proceso, que contiene el principio de la congruencia, pues su decisión es *ultra petita*, como lo consagra la norma, *‘La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.’*
5. Para terminar, no comparto la decisión de la judicatura, al proferir dicho fallo, con reconocer ese derecho que no lo tiene la señora MARITZA PEREZ, **ya que ella nunca ha tenido el derecho real de dominio o sus desmembraciones** **del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas** **UEK-808**, ni poseedora, ni tenedora y fue favorecida a recibir un beneficio contentivo del precio de dicho bien, lo que no se ajusta al ordenamiento jurídico colombiano, y que ineluctablemente se encuentra vulnerado el código adjetivo civil en los artículo 164, puesto que el Juez con la sentencia debe considerar que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y el 280, con el examen crítico de las pruebas y con las explicaciones razonadas de las conclusiones.
6. **INTERROGANTES PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, RESPETO DE LA NECESARIEDAD DE LA PRUEBA SOLICITADA:**

**El Honorable Tribunal deberá motivar su providencia conforme a los siguientes aspectos facticos:**

1. ¿Se tiene certeza sobre quien tiene o posee en la actualidad el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808?
2. ¿Se tiene certeza de si la señora MARITZA PÉREZ era propietaria, poseedora o tenedora del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808?
3. ¿Se tiene certeza de quien era el propietario del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808?
4. ¿Se tiene certeza de si la señora MARITZA PÉREZ, pagó algún derecho por el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808?
5. ¿Se tiene certeza de si la señora MARITZA PÉREZ sufrió una disminución patrimonial por la devolución a su propietario del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808?
6. ¿Se tiene certeza de si la señora MARITZA PÉREZ traditó, a la empresa A. CONCRETAR PROYECTOS S.A.S., el vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808?
7. ¿Se tiene plena convicción de que la señora MARITZA PEREZ o su mandatario, pagaron el precio de la camioneta al señor JORGE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ o WALTER RAMIREZ o LUZ MERY SANTANA VEGA –*quien es la actual propietaria*- o cualquier otra persona?
8. ¿Es legal que, ni la señora MARITZA PÉREZ, ni su mandatario DIXON CALDERON, a pesar de no tener conocimiento de la existencia del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, puede percibir aquella, un pago del precio por dicho vehículo?
9. Por último, ¿de confirmarse por parte del tribunal, la sentencia de primera instancia con respecto a la restitución, la empresa A. CONCRETAR PROYECTOS S.A.S., tendría derecho a que el actual propietario del vehículo marca TOYOTA FORTUNER de placas UEK-808, se la entregue y también sí, se obligaría a MARITZA PEREZ, a pagársela a su actual propietario?
10. **SOLICITUD DE APLICACIÓN NORMATIVA:**

En el ordenamiento procesal civil, es permitido la prueba oficiosa cuando existan vacío o pasajes oscuros al juez para decidir el objeto de la controversia, incluso en el trámite de la segunda instancia, conforme a los artículos 169 y 170 del C. G. del P.

En el plano jurídico, no es facultativo para el juez la prueba oficiosa, sino que es un imperativo cuando surja una duda que lo lleve a declarar una providencia injusta e ilegal, o en palabras del legislador, *‘cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia’*, *ídem*, en ese sentido en la Sentencia T-074/18 de la Corte Constitucional manifestó lo siguiente:

*‘5.2.1.* ***El decreto de pruebas de oficio por parte del juez ha sido definido por la Corte Constitucional como un instrumento práctico y útil*** *para alcanzar la verdad de los hechos objeto de disputa, en aquellos casos que los medios que obran en el expediente resultan insuficientes para adoptar una decisión correcta, o cuando la reconstrucción fáctica realizada por las partes, con la cual, en principio, se supone se resolvería el asunto debatido, no garantiza la igualdad procesal ni la protección efectiva de los derechos fundamentales.’ (Sentencias C-874 de 2003 y T-565 de 2016.)* (Énfasis añadido).

*‘5.2.2. De igual forma,* ***esta Corporación ha hecho hincapié en el alcance del decreto oficioso de pruebas para satisfacer los propósitos del proceso judicial.*** *Tales fines han estado relacionados con el esclarecimiento de la verdad frente a los intereses en punga, así como con la materialización de postulados constitucionales, en particular, la administración de justicia y la vigencia de un orden social justo. (Sentencia T-591 de 2011 y C-086 de 2016.)* (Énfasis añadido).

*5.2.3.* ***Bajo este panorama, esta Corporación ha manifestado que la decisión de recaudar oficiosamente información útil para el proceso judicial no constituye un acto de mera liberalidad del juez, sino un deber funcional,*** *cuando los medios de prueba llevarían a adoptar una decisión sustancialmente distinta.* ***Esta interpretación, además, se ajusta al carácter fijado en el Código General del Proceso, pues el decreto oficioso de pruebas fue constituido por el legislador como un deber judicial*** *(art. 42).’ (Sentencia T-599 de 2009.)* (Énfasis añadido).

*‘Aunque no en todos los casos la renuencia del juez a decretar pruebas de oficio constituye una decisión arbitraría o ilegal, según la jurisprudencia de esta Corporación, lo es en los eventos en que la participación judicial incida directamente en la materialización de las garantías fundamentales. Por ejemplo, i)* ***cuando de los elementos probatorios recaudados dentro del proceso surgen aspectos inciertos de la controversia;******ii)******la inactividad judicial conllevaría a adoptar una decisión injusta, desde el punto de vista material y iii) la autoridad judicial desconoce las reglas que el legislador definió previamente****.’ (Sentencia T-565 de 2016.)* (Énfasis añadido).

*‘5.2.4.* ***Así, en distintas oportunidades, esta Corporación ha analizado cómo la omisión en la práctica y decreto de pruebas de oficio ocasiona un defecto fáctico en el trámite judicial. En particular, ha concluido que tal negativa, de forma directa, involucra serias limitaciones a la dirección general del proceso, la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de vacíos o deficiencias probatorias que resultan indispensables para una correcta resolución del litigio****.’* (Énfasis añadido).

*‘Para ilustrar lo anterior, en la Sentencia T-264 de 2009, al analizar la negativa de un juez civil a reconocer las pretensiones de la demanda por falta de legitimidad por activa, argumentando que el extremo demandante omitió demostrar la relación de parentesco con la víctima, esta Corte consideró que se configuró un defecto fáctico, pues ante la necesidad de esclarecer los hechos en litigio,* ***los jueces de la causa omitieron el deber de decretar las pruebas relevantes para fallar correctamente el caso.*** *De esta manera, después de desarrollar las características del proceso civil, la Corte concluyó que la práctica de pruebas de oficio* ***“en materia civil, no es una atribución o facultad potestativa del Juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia*** *(…)”.* (Énfasis añadido).

**En el presente proceso, no solo hay espacios oscuros, sino, inexistencia del derecho que se le concedió a MARITZA PEREZ.**

El presente cambio dogmático del proceso, en el ámbito probatorio, atiende a que el Juez está compelido a resolver en derecho los supuestos facticos, y en justicia los casos que se le pongan a su resolución, es por ello que fue dotado de tales poderes de prueba oficiosa, para resolver la controversia, es así como en el numeral 4 del artículo 42 *Ut*-*supra* indica lo siguiente:

*‘****Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes****.’* (énfasis añadido).

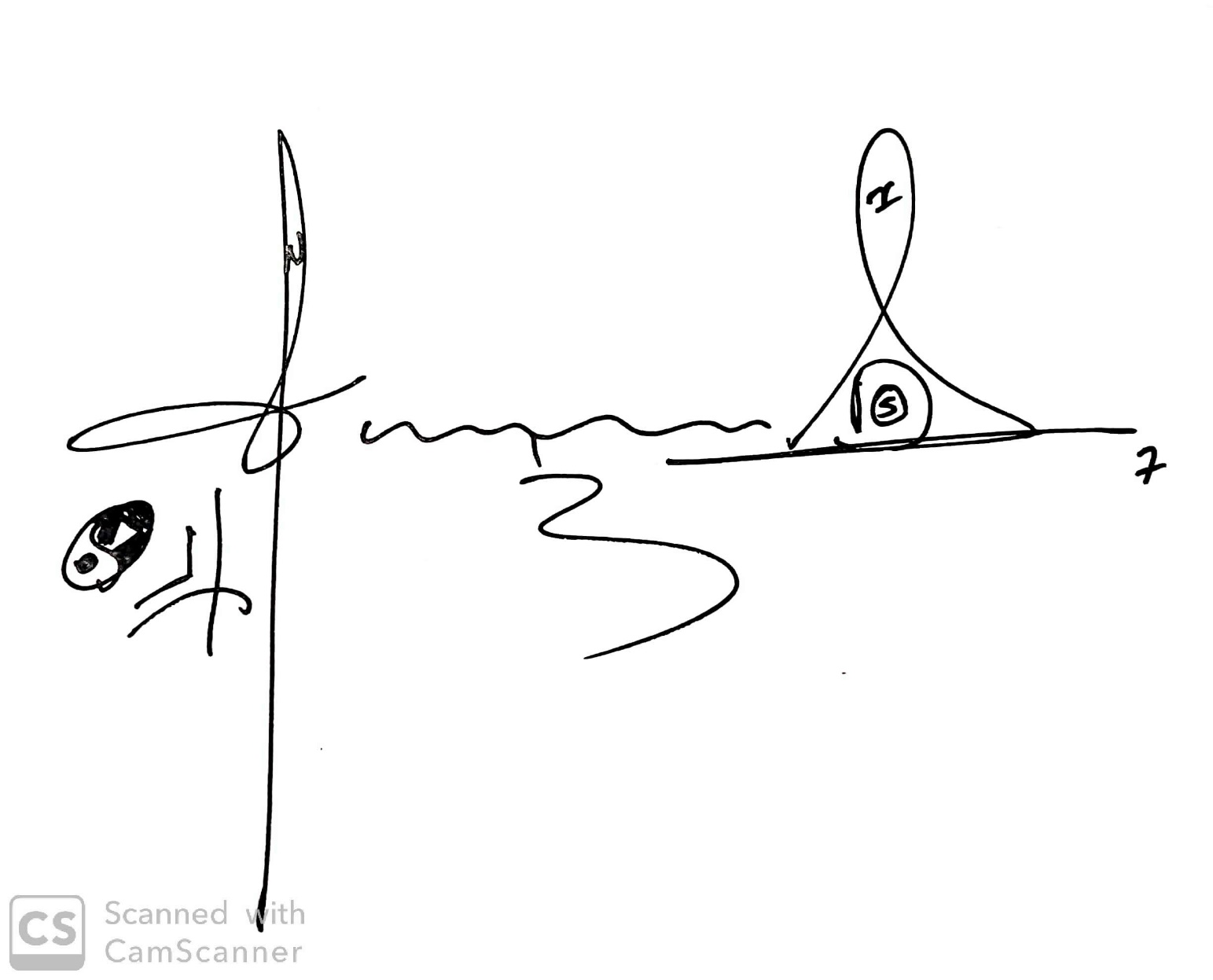
Ahora bien, en caso de requerirse la prueba oficiosa de testimonio, el articulo 169 *ídem*, exige que el testigo debe haberse mencionado en un acto procesal de la parte, la cual en la audiencia de instrucción y juzgamiento fue mencionado el NIT **901.238.145-0,** que corresponde a la empresa M&V TRANSPORTE, LOGISTICA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., representada legalmente por la señora VANESSA JUDITH VARGAS OROZCO identificada con C.C. No 55.303.162, y aquella como actual propietaria del vehículo Camioneta Santa Fe GLS, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas OQR-699, y aportado en un medio de prueba documental por el testigo GERMAN MONRROY, consistente en el Registro Único Nacional de Transito –RUNT-, por lo que se cumple la exigencia de la norma, pero que el objeto central de dicha solicitud probatoria es que, la representante legal manifieste si tiene alguna relación con la señora MARITZA PEREZ y DIXON CALDERON y por esa vía, corroborar sin asomo a dudas, la entrega del prenotado vehículo marca Hyundai.

En la misma Sentencia T-074 de 2018 de la Corte Constitucional, se decanta suficientemente los aspectos que inciden en un proceso, cuando existen vacíos probatorios para decidir y cuál es el rol que debe asumir el operador judicial para la solución correcta del caso, para lo cual transcribo apartes pertinentes de la citada Sentencia así:

*‘****Esta Corporación ha sostenido que la omisión en el decreto de pruebas por parte de la autoridad judicial competente, impide la recepción y análisis de hechos que resultan indispensables para la correcta solución del caso debatido****.****[[7]](#footnote-7)*** *Así, en los eventos que se rechaza la práctica de una prueba que conduciría a aclarar las premisas fácticas debatidas,* ***esta Corte ha sostenido que, ante tal circunstancia, se estarían vulnerando los derechos al debido proceso y a la defensa.[[8]](#footnote-8)’***(Énfasis Añadido).

*‘Esta omisión ocurre, por ejemplo, i)* ***cuando la autoridad judicial no ejerce la facultad para decretar pruebas de oficio en los casos que faltan elementos para dirimir adecuadamente el conflicto,*** *o ii)* ***cuando se niega el decreto y práctica de pruebas pertinentes, conducentes o esenciales para resolver el fondo del asunto****. Si bien, en este último caso, el juez de la causa cuenta con la autonomía e independencia para denegar una prueba solicitada por los sujetos procesales, lo cierto es que tal decisión, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación,* ***debe estar ligada a la impertinencia, inutilidad y la ilegalidad del medio requerido****.* ***De hecho, se ha sostenido que “la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva, a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha solicitado****, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de justicia, el debido proceso y defensa* ***y el deber de imparcialidad del juez*** *para el trámite del mismo”****[[9]](#footnote-9)****’.* (Énfasis Añadido).

Con el debido respeto, anexo copias simples de los medios de pruebas documentales.



No siendo otro el objeto, atentamente;

**VIRGILIO ALFONSO SEQUEDA MARTINEZ**

C.C. No 77.184.088 de Valledupar-Cesar.

T. P. No 272.853 del C. S. de la J.

1. El propietario en aquel entonces era el señor JORGE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ y su poseedor el señor WALTER RAMIREZ. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jorge Ramírez ya lo vendió a otra persona de nombre LUZ MERY SANTANA VEGA, en la fecha del 13 de mayo de 2019. [↑](#footnote-ref-2)
3. Condición o cualidad de protagonista. "asumió el protagonismo de la reunión por su facilidad de palabra"

   Tendencia que tiene **una persona** a estar siempre en el primer plano de un asunto o a mostrarse como la persona más cualificada. (Énfasis añadido). [↑](#footnote-ref-3)
4. Lo que era falso, porque el vehículo que estaba a nombre de la señora DANA CALDERON era Camioneta Santa Fe GLS, Marca Hyundai Modelo 2016 de placas OQR-699 color Blanco Cerámica. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dicho vehículo que no se sabe si existe o no. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasta la fecha 8 de noviembre de 2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. Sentencias SU-556 de 2015 y SU-537 de 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sentencias SU-132 de 2002 y T-302 de 2003. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sentencia T-488 de 1999, reiterada en el fallo T-160 de 2013. [↑](#footnote-ref-9)